

Doctora:

LORENA MARTINEZ JARAMILLO

JUEZ DIECISEIS ADMINISTRATIVO ORAL CIRCUITO JUDICIAL DE
SANTIAGO DE CALI.

E.S.D.

REFERENCIA:	CONTESTACION DE DEMANDA
RADICACION:	76001-33-33-016-2021-00193-00
DEMANDANTE:	JOSE ARBEY ARANGO MARTINEZ Y OTROS
DEMANDADO:	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI EICE ESP) DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y OTROS

VICTORIA MARTÍNEZ VARGAS, mayor de edad y vecina de esta ciudad, abogada de profesión y en ejercicio; identificada con Cédula de Ciudadanía N° 31.581.084 expedida en Cali (Valle) y portadora de la Tarjeta Profesional N° 123.546 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio en la ciudad de Cali y dirección de notificaciones, en la Avenida 2 norte # 10 – 70 Centro Administrativo Municipal CAM, torre Alcaldía piso 9 “Dirección Jurídica”, dirección electrónica: victoriagestionjuridicap@gmail.com, de manera respetuosa solicito a su Honorable Despacho se me reconozca personería jurídica para actuar, de conformidad con las facultades en el poder conferido, adjunto con sus respectivos anexos.

Dicho lo anterior y encontrándome dentro del término legal, me permito presentar CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, en los siguientes términos:

I. NOMBRE DEL DEMANDADO, SU DOMICILIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

El demandado es el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, quien en calidad de entidad territorial está exenta de demostrar su existencia al tenor de lo normado en el numeral 4° del artículo 166 de la Ley 1437 de 2011, con plena capacidad legal para obrar en el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la misma ley, legalmente representado por el Doctor JORGE IVAN OSPINA GOMEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.342.414 expedida en La Cumbre -Valle del Cauca, en su condición de Alcalde de este Distrito Especial. La representación judicial de la Entidad Territorial está a cargo de la Doctora MARÍA DEL PILAR CANO STERLING, mayor de edad y vecina de Santiago de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.869.025 expedida en Santiago de Cali –Valle del Cauca, Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Entidad, nombrada mediante decreto No 4112.010.20.0001 del 1 de enero de 2020 y acta de posesión No. 0007 del 1 de enero de 2020, debidamente facultada por el Doctor JORGE IVAN OSPINA GOMEZ en su condición de alcalde del Distrito Especial y Representante Legal del mismo, según Decreto No. 4112.010.20.0024 del 10 de enero de 2020 “Por medio del cual se efectúa una delegación en materia de Representación Judicial, Administrativa y Extrajudicial y se dictan otras disposiciones” con facultades para

actuar en nombre y representación de la Entidad ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales; quien a su vez me sustituyó, mediante PODER ESPECIAL, para que represente judicialmente al Distrito Especial en este litigio en los términos del mandato a mi conferido.

Mi nombre es **VICTORIA MARTINEZ VARGAS**, identificada con la cédula de ciudadanía N°31.581.084 expedida en Santiago de Cali y con Tarjeta Profesional de Abogada N°123.546 del Consejo Superior de la Judicatura y solicito conforme con lo anterior que se me reconozca personería jurídica para actuar a nombre del Municipio de Santiago de Cali.

Nuestro domicilio judicial está en la ciudad de Santiago de Cali. Nos pueden ubicar en el Centro Administrativo Municipal C.A.M., piso tercero y noveno de la Torre de la Alcaldía que queda en la Avenida 2N #10-70 de esta ciudad. Así mismo para efectos de notificación electrónica en la presente causa, el canal digital de la Entidad es el correo electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co.

I. OPORTUNIDAD

Conforme al reporte publicado en la página de la Rama Judicial, la demanda fue presentada el día 29 de abril de 2021, Mediante Auto Interlocutorio No. 1170 del 25 de octubre del 2021, se INADMITIO la demanda, toda vez que esta no cumplía con el requisito establecido en el Artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el Artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, es así que mediante auto Interlocutorio 209 del 25 de febrero de 2022, el despacho una vez subsanada la demanda resuelve Admitirla, auto que es notificado el día 29 de abril de esta misma anualidad.

En dicho proveído se estableció correr traslado de la demanda y sus anexos a la entidad que represento por el término de 30 días, el cual comenzará a correr trascurrido dos días hábiles siguientes al envío del mensaje del correo electrónico, conforme al artículo 199 de la ley 1437; modificado por el Artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, es decir por 30 días.

Conforme lo anterior, se tiene que el término para contestar la demanda corrió a partir del día 3 de marzo, según lo dispuesto en el mismo auto que admitió la demanda y lo consignado en los artículos 48 y 50 de la Ley 2080 del 2021, estando en término para presentarla contestación a la demanda, conforme a la constancia de envío correspondiente

II. POSICIÓN FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

Dentro del acápite de “PRETENSIONES”, contenido en la demanda, solicita la parte actora:

Me permito manifestar, en nombre de la Institución que represento en esta instancia judicial, que ME OPONGO a todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte demandante, en cuanto a que se demostrará durante el curso del proceso, que en lo relacionado con el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, no existe relación con el interés sustancial que se discute en la demanda

Teniendo en cuenta el análisis efectuado a las circunstancias fácticas, jurídicas y probatorias obrantes en la demanda, se colige la inexistencia de los elementos que permitan configurar responsabilidad patrimonial y administrativa a cargo del Distrito de Santiago de Cali, Las pruebas aportadas, no son suficientes para demostrar los elementos necesarios para estructurar la responsabilidad Estado ; en efecto el acervo probatorio no tiene la virtualidad probatoria suficiente para acreditar el nexo de causalidad entre el daño y la supuesta acción u omisión del ente territorial demandado.

Se demostrará de manera suficiente en este proceso, no existe material probatorio que permita estructurar una responsabilidad a cargo del Ente Público; así mismo se demostrara que las causas que originaron el daño que infiere haber sufrido los demandantes no son consecuencia de la responsabilidad la Entidad Territorial y por lo tanto no está obligada a indemnizar daño alguno, estableciendo desde ya que se configura entre varias excepciones que se enunciaran, una de ellas **Ausencia de pruebas para determinar la responsabilidad del Distrito de Santiago de Cali** por cuanto NO Existe prueba idónea que demuestre que existió una falla en el servicio, a su vez estamos ante la figura de **Culpa exclusiva de la víctima** , pues las lesiones sufridas por el a demandante, constituye un hecho atribuible a su propia culpa por manipular con un objeto de aluminio cuando realizaba una obra de construcción sobre el inmueble ubicado en la Carrera 93 Oeste N° 137 del Barrio Alto Jordán, a su vez como se puede evidenciar en la imagen que hace parte dela historia clínica aportada por el demandante *“que la descarga eléctrica se provoca por sostenerse de un cable de alta tensión con las manos ...”*, eventos que rompe el nexo de causalidad que debe existir entre el daño y la falla para estructurar la responsabilidad Estatal.

Alérgicos - .

EPISODIO: 7753230
Aseguradora: EMSSANAR S.A.S. RS
Historia Hospitalización
Fecha Registro: 22.12.2020
Hora Registro: 14:44:48
Responsable: MORELL PAZ, TATIANA
Especialidad: MEDICINA URGENCIAS -

MOTIVO DE CONSULTA
"Le pego la electricidad"

ENFERMEDAD ACTUAL

Informante: Paciente y equipo paramédico de transporte Paciente con cuadro clínico que inicia aproximadamente a las 13 hr cuando mientras realizaba trabajo en casa se sostiene de un cable de alta tensión con las manos saliendo eyectado desde aproximadamente tres metros de altura y cayendo sobre ambas extremidades inferiores, golpe contuso en cráneo y torso Trasladan a nuestra institución en ambulancia básica como urgencia vital ANTECEDENTES PERSONALES: Ninguno según refiere el paciente EXAMEN FÍSICO Paciente ingresa a sala de reanimación en camilla de transporte sobre tabla rígida sin collar de inmovilización cervical y sin monitoria hemodinámica.. En compañía de personal de transporte A: Vía aérea permeable sin evidencia de cuerpos extraños, modulando palabras coherentes. Se coloca collar para inmovilización cervical B: Buena ventilación bilateral sin ruidos patológicos sobreagregados. No uso de músculos accesorios de la

Sobre la figura denominada acción a propio riesgo, **el Doctor Enrique Gil Botero en su libro Responsabilidad extracontractual del Estado, Sexta Edición, expuso:**

"Este instrumento permite establecer cuando un daño es única y exclusivamente atribuible a la propia víctima, en tanto desconoció su deber de autoprotección y, por tanto, la defraudación del

rol y la concreción del riesgo es producto de su actuar. Por consiguiente, es requisito indispensable que la víctima sea un sujeto capaz y tenga pleno conocimiento. Como se aprecia, el fundamento de este elemento se halla en el deber de autoprotección, circunstancia por la que en los supuestos en los que el daño sea producto del actuar determinante y exclusivo de ese sujeto, en tanto asume el riesgo materializado, se enerva la posibilidad de atribuir el daño en cabeza de otro de los sujetos intervinientes.

Los requisitos que exige la doctrina para que opere la figura son: i) La víctima debe tener el control sobre el sí y el cómo del desarrollo de la situación peligrosa; ii) la víctima debe ser un sujeto auto responsable, con capacidad para comprender la dimensión del riesgo y este debe ser conocido por aquella; iii) El tercero no debe tener una especial situación de protección frente al bien jurídico (no debe tener posición de garante frente a la víctima)"

Aplicando la figura de la acción a propio riesgo en el caso concreto encontramos que:

- i) El señor JOSE ARBEY ARANGO MARTINEZ, tenía el control sobre el sí y el cómo del desarrollo de la situación de riesgo, como quiera que era consciente que el lugar donde se encontraba estaba atravesado por líneas de alta tensión. A demás desconocío u omitió su deber de autoprotección y el riesgo es producto de su actuar .
- ii) Que era una persona auto-responsable, con capacidad para comprender el riesgo, pues era mayor de edad y si partimos de los manifestado por el mismos sobre su ocupación como en el área de construcción, tiene mayor conocimiento sobre los riesgos y cuidados respectivos de dicha actividad.
- iii) El Estado en este caso el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, no se encontraba en posición de garante frente a la víctima, razón por la cual debemos concluir que el daño padecido debe ser atribuible de manera exclusiva al actuar de la propia víctima.

En efecto, la actividad cuyo riesgo finalmente se concretó no estaba a cargo del ente territorial demandado y no fue desarrollada por ninguno de los agentes ; razón por la cual, el resultado dañino no le es imputable, al no haber participado ni por acción , ni por omisión, en la producción del daño, por lo que no se configura responsabilidad alguna, toda vez que es importante precisar que esta clase de trabajos de mantenimiento de redes de energía eléctrica (colocación de postes), por concepto de la prestación de servicios públicos domiciliarios no les compete al Distrito Especial de Santiago de Cali, por cuanto ésta función le Corresponde a las EMPRESAS MUNICIPALES DE EMCALI .

Así las cosas, el nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La Jurisprudencia y Doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de la acción u omisión, es indispensable definir sin aquel parece ligado a ésta por una relación causa efecto, si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad.

Así mismo, el Consejo de Estado ha establecido que el nexo de causalidad debe estar probado por el demandante, independiente del régimen aplicable, ya sea el régimen objetivo o subjetivo , ello por cuanto el nexo de causalidad es de un elemento autónomo al daño y no admite ninguna presunción como si lo admite la culpa o la falla , razón por la cual , se reitera el mismo debe acreditarse fehacientemente, lo que no ocurre en el presente asunto, puesto que no se demuestra cual fue la acción u omisión del Distrito Especial de Santiago de Cali en los hechos que fundamentan la presente acción incoada, máxime cuando la trasmisión y distribución de energía en la ciudad, se encuentra a cargo de

EMCALI E.I.C.E.S.P, siendo una empresa que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial, de conformidad con el Acuerdo N° 34 de 1999., Artículo 4 del acuerdo 0489 de 2020., con ello configurándose también **una Falta de Legitimación en la Causa por pasiva.**

En concordancia con lo antes manifestado, estimo que no existe nexo de causalidad que acredite la acción u omisión por parte de la Administración Municipal, que conllevara con ello a producir un daño en la integridad del señor JOSE ARBEY ARANGO careciendo la demanda de elementos que estructuren la imputación de responsabilidad, por lo cual, considero que es improcedente declarar patrimonialmente responsable a mi defendido.

Así también, es menester tener en cuenta que no solo basta la manifestación del Administrado sobre la ocurrencia de un hecho, sino que debe existir prueba que demuestre el hecho.

Al respecto se debe tener en cuenta el artículo 90 de la Carta Política, donde se manifiesta que *"El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por acción o la omisión de las autoridades públicas"* Artículo 167 del C.G.P, norma general del régimen probatorio, según el cual, *"incumbe a las partes probar el supuesto hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen"*

No existe relación de causalidad directa inmediata y exclusiva entre el hecho y el daño que sea imputable al Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresaria y de Servicios de Santiago de Cali.

Respecto a la solicitud de perjuicios materiales en la modalidad de **lucro cesante consolidado y futuro**, no existe prueba alguna que acredite que hubo un lucro dejado de percibir en el patrimonio del señor JOSE ARBEY ARANGO, así como tampoco existe prueba que las supuestas lesiones padecidas sean responsabilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali.

Este tipo de perjuicio no admite ningún tipo de presunción y su reconocimiento debe someterse a prueba objetiva. Esta situación impide una cuantificación del perjuicio en los términos solicitados por la parte actora, pues ante la inexistencia de prueba, no hay facultad oficiosa para inferir o presumir el hecho.

Actualmente asumida por el Consejo de Estado en Sentencia de unificación del 18 de julio de 2019, expediente 44.572, ponente Dr. Carlos Alberio Zambrano, en la que se dispuso: Esta Corporación concibe el lucro cesante como *"...La ganancia frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y qué, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima. (Sic) pero que (sic) como todo perjuicio para que proceda su indemnización, debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna..."*

Esta Jurisprudencia elimina presunciones de cualquier tipo para acceder al reconocimiento a indemnización por lucro cesante y, a su turno, exige la prueba que acredite el lucro recibido y sobre el cual se liquidará el consolidado o futuro, prueba que para el caso que nos ocupa no existe.

Respecto a los perjuicios extra patrimoniales en la modalidad de daño moral, la Jurisprudencia del Consejo de Estado, ha dejado sentado que para que un daño sea indemnizable, debe ser cierto, es decir, debe ser *"no un daño genérico o hipotético sino uno específico, cierto, el que sufre una persona determinada en su patrimonio"*. Igualmente ha establecido que debe utilizarse como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los eventos de lesiones, **la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima**. Conforme lo señalado, deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, para determinar el monto indemnizatorio en salarios mínimos.

Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado.

En el caso que nos ocupa en la modalidad de perjuicios morales, la parte actora está solicitando el reconocimiento de 100 SMLMV para cada uno de los demandantes. Excepto para VIVIANA ANDRA ARBOLEDA Y ELVIA LIBIA GONZALEZ MIRANDA (Terceras afectados) por quienes solicita 25 SMLMV por cada una. Esto quiere decir que los demandantes están considerando que la gravedad de la lesión tiene un porcentaje igual o superior al 50%, cuando como se ha venido insistiendo no se encuentra acreditada la gravedad de las lesiones sufrida por el señor JOSE ARBEY ARANGO MARTINEZ., desconociendo lo estipulado por el Consejo de Estado, en su línea jurisprudencial donde ha unificado los criterios para establecer la liquidación de los perjuicios inmateriales que para el Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

Conforme a lo anterior, se desprende la necesidad de una pluralidad de indicios para fundamentar la decisión judicial , para que se decrete la presunción del daño moral a favor de una víctima indirecta se considera necesario que la decisión se sustente en varios indicios y no en la presunción; además, los indicios que se arrimen al

proceso deben ser de aquellos de los cuales pueda colegirse con visos de certeza relaciones de afecto, por ejemplo, la convivencia o cercanía y no solo formales, entre víctima directa e indirecta.

Finalmente, en el presente asunto no existen elementos de prueba para estructurar la responsabilidad sobre la cual se pretende su declaración, además que la cuantía solicitada excede los parámetros fijados para su reconocimiento. En igual sentido, deberá acreditarse el padecimiento del perjuicio y la gravedad de las lesiones, pues como se ha venido insistiendo, no hay pruebas que acrediten que la causa eficiente de las supuestas lesiones que dice padecer la Demandante hayan sido ocasionadas por una presunta falla del servicio por parte del ente territorial que represento.

Se reitera que el supuesto daño causado obedece al descuido con que el actor desplegó la actividad de manipular con un objeto de aluminio (material conductor de energía eléctrica) cuando realizaba una obra de construcción sobre el inmueble en un tercer piso, el cual se encontraba sin elementos de protección personal como un arnés, conectores, línea de posicionamiento y demás elementos que garanticen la seguridad, lo cual hubiese evitado que se desencadenara el lamentable suceso, al manifestar el demandante que cayó de un tercer piso.

Dicha actividad, se encuentra catalogada como de alto riesgo debido a que en las estadísticas nacionales es una de las primeras causas de accidentalidad y de muerte en el trabajo; las tareas que involucran trabajo en alturas, requieren de la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de actividades para su intervención, es por ello el Ministerio del Trabajo expidió el Reglamento de Seguridad para Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas (Resolución 1409 de 2012), el cual es de estricto cumplimiento para empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales del país.

En cuanto al daño a la salud, hago referencia a los criterios contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, exp.19031 proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso administrativo y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera. La indemnización en los términos del fallo referido está sujeto a lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la víctima directa en cuantía que no podrá exceder de 100SMLMV siempre y cuando la gravedad supere el 50%, circunstancia que en el presente caso no está probada y en consecuencia le está vedado al Juez presumirlo. No hay prueba alguna de la gravedad de las supuestas lesiones padecidas por el demandante, y en el hipotético reconocimiento del daño, tampoco existe acervo probatorio que determine la responsabilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali

Así las cosas, se puede concluir que las condiciones médicas que padece la demandante descritas en la demanda, y en la historia clínica aportada al plenario, nada tienen que ver con la Entidad que represento, Distrito Especial de Santiago de Cali, pues está demostrado que estas afecciones las padecía desde antes del supuesto siniestro acontecido el 22 de diciembre de 2020.

Además de lo anterior, la parte actora **NO CUENTA CON DICTAMEN DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL** para establecer la gravedad de las lesiones, siendo subjetivamente califica por el abogado del demandante las lesiones y perjuicios.

III. PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL ACÁPITE DE “HECHOS”

La posición del ente territorial que represento, frente a los hechos en que apoyan sus pretensiones los demandantes, es la siguiente:

FRENTE AL HECHO PRIMERO: No me consta lo manifestado por la parte demandante en relación a la conformación de su núcleo familiar y su relación afectiva de amor, respeto y ayuda mutua, dicha situación debe ser probada dentro del proceso judicial.

FRENTE AL HECHO SEGUNDO: No me consta la ocupación del señor JOSE ARBEY ARANGO, no hay evidencia probatoria conducente que indique lo señalado, por tal motivo dicha situación debe ser probada dentro del proceso

FRENTE AL HECHO TERCERO: No me consta que el señor JOSE ARBEY ARANGO MARTINEZ, se encontrara en el lugar manifestado, Por tal motivo dicha situación debe ser probada dentro del proceso, teniendo en cuenta que lo narrado por la parte demandante no puede inferirse mayor información dada la precariedad en la explicación, pues no se expone con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dan lugar a la descarga eléctrica que ocasiona las lesiones en la integridad del mismo.

Sin embargo es bueno precisar que en la historia clínica N° 1366818, aportada por el mismo, emitida por la FUNDACION VALLE DEL LILI, se señala que el motivo de consulta es “*le pegó la electricidad*” y en el acápite de Enfermedad Actual, se señala que el paciente se realizando en casa se sostiene de un cable de alta tensión con las manos saliendo eyectado desde aproximadamente tres metros de altura.... Evidenciando una incoherencia entre lo manifestado en la demanda y en la historia clínica

Alérgicos - .

EPISODIO: 7753230

Aseguradora: EMSSANAR S.A.S. RS

Historia Hospitalización

Fecha Registro: 22.12.2020

Hora Registro: 14:44:48

Responsable: MORELL PAZ, TATIANA

Especialidad: MEDICINA URGENCIAS -

MOTIVO DE CONSULTA

"Le pego la electricidad"

ENFERMEDAD ACTUAL

Informante: Paciente y equipo paramédico de transporte Paciente con cuadro clínico que inicia aproximadamente a las 13 hr cuando mientras realizaba trabajo en casa se sostiene de un cable de alta tensión con las manos saliendo eyectado desde aproximadamente tres metros de altura y cayendo sobre ambas extremidades inferiores, golpe contuso en cráneo y torso. Traslada a nuestra institución en ambulancia básica como urgencia vital. ANTECEDENTES PERSONALES: Ninguno según refiere el paciente. EXAMEN FÍSICO: Paciente ingresa a sala de reanimación en camilla de transporte sobre tabla rígida sin collar de inmovilización cervical y sin monitoria hemodinámica. En compañía de personal de transporte A: Vía aérea permeable sin evidencia de cuerpos extraños, modulando palabras coherentes. Se coloca collar para inmovilización cervical B: Buena ventilación bilateral sin ruidos patológicos sobreagregados. No uso de músculos accesorios de la

FRENTE AL HECHO TERCERO Y CUARTO: No me consta, es pertinente señalar que de las pruebas aportadas con la demanda, no permiten colegir las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurrieron los hechos, como lo manifieste en el hecho anterior no hay evidencia probatoria conducente que indique lo señalado, por tal motivo dicha situación debe ser probada dentro del proceso.

FRENTE AL HECHO QUINTO: No me consta lo manifestado por el demandante, conforme a ello deberá la parte actora con cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del CPACA, y en este sentido acreditar lo afirmado a través de la prueba que resulte conducente, pertinente y útil.

FRENTE AL HECHO SEXTO: No me Consta, sin embargo aporta historia Clínica, con fecha 22 de diciembre de 2020, donde se realiza un diagnóstico clínico frente a una lesiones sufridas.

FRENTE A LOS HECHOS SEPTIMO, OCTAVO y NOVENO: No me consta, sin embargo como ya se expresó, el demandante aporta historia Clínica N°1366818 constante de varios folios donde se señalan los diagnósticos y procedimientos realizados al señor ARBEY ARANGO MARTINEZ.

FRENTE A LOS HECHOS DECIMO, DECIMO PRIMERO, DECIMO SEGUNDO Y DECIMO TERCERO: No me consta, el demandante aporta historia clínica N° 1366818 contante de varios folios donde se señala el diagnóstico y procedimientos médicos realizados al señor ARBEY ARANGO MARTINEZ.

FRENTE AL HECHO DECIMO CUARTO Y DECIMO QUINTO : No me consta, el demandante aporta Historia Clínica, Hospital Universitario del Valle, donde es tratado por ORTOPEDIA, donde se señala el diagnóstico y procedimientos médicos realizados al señor ARBEY ARANGO MARTINEZ.

FRENTE AL HECHO DECIMO SEXTO: No me consta, me atengo a lo que quede probado en el proceso, es una situación ajena a mi representada, No hay soporte probatorio que sustente lo manifestado, por tanto debe de probarse dentro del proceso, conforme a lo señalado el artículo 167 del código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del CPACA, y en este sentido acreditar lo afirmado a través de la prueba que resulte conducente, pertinente y útil.

IV. FUNDAMENTACIÓN FACTICA Y JURÍDICA DE LA DEFENSA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la parte convocante, por cuanto no existe relación de causalidad directa inmediata y exclusividad entre el presunto hecho y el daño para que sea imputable al Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.

Con Respecto a la Responsabilidad Administrativa del Estado por daños causados a particulares, La jurisprudencia tradicionalmente adopta y exige la presencia de tres elementos esenciales: 1) la existencia de un daño antijurídico, 2) la imputación jurídica y fáctica, que en el asunto concreto, corresponde a la falla en el servicio (por acción , u omisión, retardo o irregularidad en la prestación) y, 3) el nexo causal entre el daño y la falla en el servicio...”; es decir una relación de causalidad entre la falla o falta de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o la falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización . Esta defensa se centrará en analizar la imputación jurídica y fáctica y el nexo causal entre el daño y la presunta falla.

La Esencialidad de los tres (3) anteriores elementos llegan al extremo, que faltando uno de ellos no se configura la responsabilidad administrativa.

En esa dirección, para esta defensa en el presente caso no se ha demostrado el nexo causal entre los otros dos elementos.

Bajo la anterior idea, en nuestro sistema judicial le corresponde al interesado en la indemnización, probar la falla del servicio de la Administración para la cual se requiere la demostración de los siguientes elementos: la falencia de la Administración por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio; el daño o lesión a un bien jurídicamente tutelado por el derecho, particular, cierto, anormal, y el nexo de causalidad, Adecuado y determinante, entre la anomalía administrativa y el daño.

En el Juzgamiento de daños inferidos por el mal funcionamiento del servicio, se exige de ciertas puntualizaciones, pues no es viable predicar que para obtener una indemnización por parte del Estado, siempre le baste al reclamante comprobar la omisión de servicio, su retardo o su prestación deficiente.

Al respecto, el Honorable Consejo de Estado ha sido reiterativa en cuanto a que el artículo 90 de la Constitución Política no consagra una responsabilidad absolutamente objetiva y que por el contrario, aun con base en dicha disposición la falla del servicio

sigue siendo el régimen general de responsabilidad estatal, a lado del cual se reconoce la existencia de regímenes objetivos, permite indicar que bajo el fundamento del rompimiento de igualdad ante las cargas públicas no puede indemnizarse todos los daños que sufren los particulares.

Sin embargo, con posterioridad, la misma Sección reformuló su interpretación del artículo 90 superior y concluyó que la responsabilidad del Estado se origina, de un lado, cuando Existe una lesión causada a la víctima que no tiene el deber jurídico de soportar y, de otro, cuando esa lesión es imputable fáctica y jurídicamente a una autoridad pública. De hecho, esa tesis fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia C-333 de 1993, en la cual expresó que “es menester, que además de constatar la antijuricidad del daño, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la *imputatio juris además de la imputatio facti*”

Los hechos objeto de la presente acción, deberán manejarse dentro del régimen de falla ordinaria o falla probada, en donde le corresponde a la demandante la demostración de los elementos que configuran la responsabilidad; entendiendo que, si bien existe un daño, no se evidencia el nexo causal que une el mismo con la falla del servicio reclamada al Ente Territorial.

El demandante, parte de la premisa que existe una omisión por parte de la Entidad que represento a título de falla en el servicio por la responsabilidad de velar por falta de mantenimiento y control de las líneas de electricidad sin embargo es pertinente informar que ninguna de las dependencias del Distrito Especial de Santiago de Cali, le corresponde prestar el servicio de energía, no son de su propiedad, como tampoco de su incumbencia su mantenimiento, conservación, ubicación y reubicación de postes. En este caso corresponde a las **EMPRESAS MUNICIPALES DE EMCALI EICE-E.S.P.**

El Distrito Especial de Santiago de Cali, fundamentara su defensa en que no se ha configurado los elementos de la responsabilidad por falla del servicio como quiera que no se evidencia acción u omisión del ente territorial que comprometa su responsabilidad en los hechos, pues el señor JOSE ARBEY ARANGO MARTINEZ , estaba desempeñando una actividad peligrosa, al manipular con un objeto de aluminio (material conductor de energía eléctrica) cuando realizaba una obra de construcción sobre el inmueble en un tercer piso , el cual se encontraba sin elementos de protección personal como un arnés, conectores, línea de posicionamiento y demás elementos que garantizan la seguridad, recibiendo como el señala una descarga eléctrica, el cual si hubiese actuado c atribuíble a la propia víctima, en tanto desconoció su deber de autoprotección y la concreción del riesgo es producto de su actuar.

DE LA IMPROCEDENCIA DE REPARACIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD ESTATAL

El artículo 90 de la Constitución Política, establece que “Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la

acción o la omisión de las autoridades públicas” al respecto las altas Cortes han precisado que el daño antijurídico hace referencia a la lesión de un bien legítimo tutelado, que la víctima no está en obligación de soportar.

De la definición del daño puede tenerse que el antijurídico es aquel que causa un perjuicio cierto el cual la persona no está en obligación de soportar; de otro lado se tiene que en esa definición el Estado no está en la obligación de indemnizar los daños que no sean objeto de protección jurídica por acción u omisión.

En este orden existe una causal de exoneración de responsabilidad para el Estado que rompe la imputación que es la Ausencia de pruebas para determinar la responsabilidad del Distrito de Santiago de Cali. Pues no siempre que exista un daño es procedente declarar la responsabilidad al Estado, a pesar de que el DAÑO es un requisito indispensable no es suficiente para tal declaración, pues en algunas ocasiones los daños pueden ser atribuibles a la propio lesionado y el Estado no tiene el deber de repararlo porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre. Esto nos hace concluir que la sola presencia del daño no exige la indemnización por parte del Ente territorial.

DE LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD

El daño objeto del presente proceso no fue producto de una acción del Distrito Especial de Santiago de Cali, pues no existe prueba conducente y pertinente que así lo indique.

Por ello el presente caso deberá estudiarse bajo el régimen de falla probada, en el cual los demandantes les corresponden demostrar que convergen todos los elementos que materializan la responsabilidad estatal; además debe acreditar la existencia de falla en el servicio, puesto el señor ERVIS CARVAJAL TOMBE según historia clínica, al tocar con un material metálico una línea eléctrica recibe una descarga eléctrica, sometiéndose al riesgo.

Respecto al Elemento de Nexos Causales, se exige para su configuración que se presente de forma manifiesta y precisa entre el hecho y el daño, colocando especial atención a las circunstancias y hechos que fueron realmente determinantes e influyeron en el resultado; situación que no se predica en la demanda.

V. EXCEPCIONES

➤ FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA:

En la verificación de los presupuestos procesales materiales o de fondo, dentro de los cuales se encuentra la legitimación en la causa, compete analizarla legitimidad para obrar dentro del proceso de la parte demandada y su interés jurídico, pues la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria entre otras, para dicta sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado.

Con relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la Jurisprudencia Constitucional se ha referido a ella, como la "*calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso*", de forma tal, que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el Juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas.

ha de tenerse en cuenta señor Juez que es **EMCALI E.I.C.E E.S.P**, es una persona jurídica distinta al Ente Territorial.

En Sentencia del 22 de noviembre de 2001 el Consejo de estado, con ponencia de María Elena Giraldo Gómez frente al tema de Legitimación en la causa, expone que:

"...La legitimación de hecho en la causa es entendida como la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado. Quien cita a otro y atribuye está legitimado de hecho y por activa, y 9 quien cita y atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto Admisorio de la demanda. Vg.: A demanda a B. Cada uno de estos está legitimado de hecho..."

"...La legitimación material en la causa alude, por regla general, a situación distinta cual es la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas o hayan demandado .o que hayan sido demandadas..."

(..) La falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerva la pretensión procesal en su contenido, como si lo hace una excepción de fondo, La excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone al demandado o advierte el juzgador (Art.164 C. C,A) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal. La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado - modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante — que enerva la prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo.

La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una Condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de Mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en /a causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganan. Si la falta recae eh el demandante el demandad() tiene derecho a ser absuelto, pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo - no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte, al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder. por eso, de otra parte, él demandado debe ser absuelto, Así las cosas, tenemos entonces que la Legitimación en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado.

Ha de tenerse en cuenta señor Juez que:

El Acuerdo 34 de enero 15 de 1999 "Por medio de la cual se adopta el Estatuto Orgánico para la Empresa Industrial y Comercial de Cali, EMCALI E.I.C.E. E.S.P., se modifica el acuerdo 014 de 1996, se dan unas autorizaciones al señor alcalde y se dictan otras disposiciones

“Artículo 1: Naturaleza Jurídica. Las Empresas Municipales de Cali transformadas mediante el artículo cuarto del acuerdo 014 de 1996, seguirá siendo una empresa industrial y comercial del estado de orden municipal, prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada de personería jurídica patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa y de objeto social múltiple”

Es importante traer a Colación que de Conformidad con el Acuerdo Municipal 0489 de 2020, que modifica el Artículo cuarto del Acuerdo 034 de 1999, se establece:

ARTICULO CUARTO: OBJETO SOCIAL. Las Empresas Municipales de Cali, EMCALI E.I.C.E. E.S.P., tendrán como objeto social prevalente la prestación de todos los servicios públicos domiciliarios contemplados en las Leyes 142 y 143 de 1994 y en las demás disposiciones que las adicionen o reformen, incluyendo sus actividades complementarias, inherentes, consustanciales o conexas. De igual manera EMCALI E.I.C.E. E.S.P., podrá prestar los servicios de telecomunicaciones, incluyendo los servicios agregados y servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC's, contenidos en las leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019; 182 de 1995 y 1507 de 2012, y demás disposiciones que las adicionen o reformen. Este objeto comprende, a título enunciativo, los servicios públicos domiciliarios de: acueducto, alcantarillado, aseo, energía, distribución de gas combustible, telefonía fija publica básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. Igualmente, prestara los servicios o actividades complementarias y asimiladas o equivalentes de estos, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 17, 290 y 298 de la Ley 1955 de 2019, o la norma que los modifique, complemente, desarrolle o sustituya...”

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E E.S.P., es una entidad descentralizada del orden municipal desde el año 1961, regida por normas propias de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, prestadora de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Energía Eléctrica en la ciudad de Cali, además del servicio no domiciliario de telefonía fija básica local conmutado.

Dicha entidad creada bajo la figura de descentralización, obedece a un principio fundamental de la organización del Estado Colombiano, el cual se encuentra estipulado en la Constitución Política de Colombia, así:

“Artículo Primero: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativo y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”

Frente a este concepto el Departamento Nacional de Planeación — Dirección de Desarrollo Territorial, en el escrito "Balance de la descentralización municipal en Colombia: balance de una década", lo definió así:

"La descentralización es un proceso mediante el cual se transfiere poder de decisión y responsabilidad desde el nivel central de una organización, a unidades descentralizadas o alejadas del centro. La descentralización se aplica tanto en organizaciones privadas como públicas con el propósito general de mejorar la eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos".

En este sentido la Corte Constitucional, manifiesta en sentencia C —1258 de 2001, La autonomía es un elemento sustancial de la organización del Estado colombiano y tiene su especificidad frente a la descentralización. Por ello la autonomía de las entidades territoriales se distingue de la descentralización territorial. Mientras que la descentralización se refiere al contenido material, a las competencias y recursos

asignados por la Constitución y la ley a los entes territoriales, la autonomía consiste en el margen o capacidad de gestión que el constituyente y el legislador garantizan a las entidades territoriales para que planeen, programen, dirijan, organicen, ejecuten, coordinen y controlen sus actividades, en aras del cumplimiento de las funciones y fines del Estado. Además, la autonomía es una consecuencia sine qua non de la descentralización, aunque no es exclusiva de ésta. No es previsible un régimen de descentralización como forma de organización política de un Estado, en donde no haya autonomía de los entes territoriales.

En razón de lo expuesto y siguiendo el supuesto factico y de derecho que encuentra sustento en: el límite mínimo de la autonomía territorial, garantizado por la Constitución, constituye su núcleo esencial y está integrado por el conjunto de derechos, atribuciones y facultades reconocidas en la Carta Política a las entidades territoriales y a sus autoridades, para el eficiente cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, es claro que el Distrito de Santiago de Cali no tiene ninguna injerencia en lo demandado.

En este contexto, señor Juez, reitero que mi representado no es responsable de los cables de energía de alta tensión que aparentemente causo el accidente, la actividad cuyo riesgo, no está a cargo del Distrito Especial de Santiago de Cali, y no fue desarrollada por ninguno de sus agentes, razón por la cual, el resultado dañino no le es IMPUTABLE, y es EMCALI E.I.C.E E.S.P., quien debe responder si se encuentra probada la falla, pues esta cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial, estando en capacidad de responder por los daños a terceros que le fueran imputables.

En este orden de ideas, se puede concluir que el Distrito Especial de Santiago de Cali, no participó por acción u omisión en la producción del daño, pues en el acervo probatorio aportado por los demandantes no logran dilucidar la relación de causalidad entre el hecho dañoso y la omisión que se le imputa al ente territorial, pues es de suma relevancia acreditar la falla del servicio en el cumplimiento de su deber y el apoderado de la parte actora no logra demostrar la omisión del ente territorial probatoriamente.

➤ **EXCEPCIÓN POR HECHO DE UN TERCERO**

CULPA DE CONSTRUCTOR, MAESTRO DE OBRA Y/O DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE.

Antes de la construcción de las obras realizadas en el inmueble por parte de un constructor, se tienen que solicitar la aprobación de las mismas por una de las tres Curadurías Urbanas de la Ciudad de Cali.

Según se expresa en los hechos de la demanda, el señor se encontraba en un piso 3, es posible que al realizarle adecuaciones y remodelaciones por parte del propietario, se pudo haber violado las normas de seguridad, quedando la construcción muy próxima a las redes eléctricas. De este hecho debió percatarse el constructor de la obra y/o propietario del inmueble. A sabiendas del peligro que representaba para los trabajadores, moradores y vecinos de este inmueble esta proximidad.

Siendo también esta una causal de exoneración de responsabilidad, por tanto se solicita no condenar al Distrito especial de Santiago de Cali por los perjuicios, pues no hubo

participación de sus funcionarios y mucho menos responsabilidad administrativa por acción u omisión. Realizando construcciones sin licencia urbanísticas, violando el Decreto 1077 de 2015, Título 6 :

“ARTÍCULO 2.2.6.1.1.1 Licencia urbanística. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente se requerirá licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amueblamiento o para la intervención del mismo salvo que la ocupación u obra se ejecute en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes.

La licencia urbanística es el acto administrativo de carácter particular y concreto, expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por medio del cual se autoriza específicamente a adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y realizar el loteo o subdivisión de predios.”

Es así entonces, que los propietarios de los inmuebles al momento de construir sus viviendas o al remodelarlas o ampliarlas tienen la obligación legal de solicitar los permisos correspondientes ante las Curadurías Urbanas o planeación Municipal que garanticen que las construcciones van a respetar las distancias de seguridad respecto de las redes eléctricas y que van a respetar la línea de paramento y la zona destinada a los servicios públicos y una vez son verificados los planos de la construcción, en caso de que no se vayan a respetar las distancias de seguridad con la obra que se pretende desarrollar, se debe informar al operador de red para que se estudie la posibilidad o no de traslado de las redes eléctricas y por tanto, se debe tener en cuenta la situación de la zona en los estudios técnicos, de factibilidad y pre factibilidad y en caso de ser viable la construcción, los costos deben ser asumidos por el usuario.

Por tanto, es una carga injustificada e inequitativa que los el Distrito Especial de Santiago de Cali, deba responder por los daños que se causen con energía eléctrica cuando un ciudadano no sigue el procedimiento legal establecido para construir o remodelar un inmueble y con su propio actuar ilegal construye una vivienda sin observar las distancias de seguridad, toda vez que es esa persona la que crea el riesgo y se expone al mismo con pleno conocimiento, no el operador del servicio, ello sería tanto como avalar la conducta ilegal de un administrado que tiene también la carga de cumplir con lo que la ley ordena en torno a la construcción de viviendas y además de ello que el operador de red, sin responsabilidad ni participación en dicha conducta ilegal, deba indemnizarle por un daño derivado de un riesgo que dicho administrado creó o que deba indemnizar a una persona que fue objeto de un daño ocasionado por el riesgo creado por un tercero que en nada tiene que ver con el prestador del servicio.

De ahí pues, que por el hecho de tratarse la actividad de conducción de energía eléctrica de una actividad peligrosa, no significa que ipso facto los prestadores del servicio sean los responsables de los daños que se irroguen con energía eléctrica; y es por ello, que el juzgador debe entrar a analizar de quién es la culpa de la ocurrencia del daño, pues nadie está obligado a responder por los daños causados por la culpa de otro, quien le sea ajeno y sobre el cual no detente una guarda, custodia y cuidado.

➤ **AUSENCIA DE PRUEBAS PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD AL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI:**

En el presente petitum, existe una evidente carencia probatoria respecto a la acreditación de las circunstancias determinantes en que se presentó el accidente; no existe material probatorio que permita establecer la presunta falla del servicio que pretende la parte convocante sea imputada al Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.

Debe considerarse que no obra prueba idónea que demuestre las circunstancias de modo en que supuestamente ocurrió el accidente que permita corroborar la realidad fáctica de los hechos de la demanda, y por ende la causa eficiente del mismo.

En efecto, Como ya se mencionó, no obra prueba idónea que demuestre las circunstancias de modo en que supuestamente ocurrieron los hechos que dieron origen a la descarga eléctrica, que permita corroborar la realidad fáctica de los hechos de la, no es clara la información aportada por el abogado en los hechos, la suscrita se basa en información que reposa en la historia Clínica lo siguiente:

MOTIVO DE CONSULTA

"Le pego la electricidad"

ENFERMEDAD ACTUAL

Informante: Paciente y equipo paramédico de transporte Paciente con cuadro clínico que inicia aproximadamente a las 13 hr cuando mientras realizaba trabajo en casa se sostiene de un cable de alta tensión con las manos saliendo eyectado desde aproximadamente tres metros de altura y cayendo sobre ambas extremidades inferiores, golpe contuso en cráneo y torso. Traslada a nuestra institución en ambulancia básica como urgencia vital. ANTECEDENTES PERSONALES: Ninguno según refiere el paciente. EXAMEN FÍSICO: Paciente ingresa a sala de reanimación en camilla de transporte sobre tabla rígida sin collar de inmovilización cervical y sin monitoria hemodinámica. En compañía de personal de transporte A: Vía aérea permeable sin evidencia de cuerpos extraños, modulando palabras coherentes. Se coloca collar para inmovilización cervical B: Buena ventilación bilateral sin ruidos patológicos sobreagregados. No uso de músculos accesorios de la

Es aquí donde debemos tener en cuenta la teoría de la causalidad, la cual sostiene que no todas las condiciones que concurren a un resultado adquieren la categoría de causas que originan la responsabilidad. Hay que separar, escoger aquellos fenómenos, circunstancias, hechos que realmente fueron determinantes e influyeron en el resultado.

En este orden de ideas, estimo que existen razones suficientes para oponerme totalmente a las pretensiones contenidas en la demanda, por cuanto se encuentra demostrada la inexistencia de responsabilidad patrimonial en cabeza de la entidad territorial, lo que hace improcedente reclamar indemnización alguna, al no existir nexo causal el cual es un elemento estructurador de la mencionada responsabilidad, es decir, no existe causalidad adecuada entre el daño padecido por los demandantes, existiendo una evidente carencia probatoria respecto a la acreditación de las circunstancias determinantes del modo como aduce la parte demandante respecto a la manera como se presentó el siniestro; no existe material probatorio que permita establecer el nexo de causalidad entre la presunta omisión que pretende el demandante sea imputada al Distrito Especial de Santiago de Cali, y la ocurrencia de los hechos.

Ante lo cual, el despacho al momento de entrar a determinar la presunta responsabilidad atribuible al Distrito Especial de Santiago de Cali, debe poder establecer con base en el material probatorio obrante en el proceso, cuál es la causa adecuada del accidente, es decir las circunstancias de la ocurrencia de los hechos que nos ocupan, se debe lograr establecer, cuál de las mismas fue la que contribuyó de forma determinante y directa en la

irrogación del daño causado a la parte demandante y por tanto, dejar de una lado aquellas que solo sean causa pasiva dentro de los hechos.

➤ **CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA:**

En el caso particular se establece esta hipótesis soportada en lo consignado por la parte actora en la historia clínica cuando se menciona que recibe la descarga eléctrica cuando el señor JOSE ARBEY ARANGO MARTINEZ , estaba desempeñando una actividad peligrosa, al manipular con un objeto de aluminio (material conductor de energía eléctrica) cuando realizaba una obra de construcción sobre el inmueble en un tercer piso, el cual se encontraba sin elementos de protección personal como un arnés, conectores, línea de posicionamiento y demás elementos que garantizan la seguridad, recibiendo como el señala una descarga eléctrica, atribuible a la propia víctima, en tanto desconoció su deber de autoprotección y la concreción del riesgo es producto de su actuar., adicional a ello manifiesta que a causa de la descarga eléctrica cae de un tercer piso, caída que probablemente le genera las fracturas, hecho completamente atribuible a su responsabilidad por no tener los elementos de protección personal.

Con esto toma más fuerza figura denominada acción a propio riesgo, el Doctor Enrique Gil

i)El señor JOSE ARBEY ARANGO MARTINEZ, tenía el control sobre el sí y el cómo del desarrollo de la situación de riesgo, como quiera que era consciente que el lugar donde se encontraba estaba atravesado por líneas de alta tensión. A demás desconoció u omitió su deber de autoprotección y el riesgo es producto de su actuar. (Elementos de protección personal)

ii) Que era una persona auto-responsable, con capacidad para comprender el riesgo, pues era mayor de edad y si partimos de lo manifestado por el mismo sobre su ocupación como en el área de construcción, tiene mayor conocimiento sobre los riesgos y cuidados respectivos de dicha actividad.

iii) El Estado en este caso el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, no se encontraba en posición de garante frente a la víctima, razón por la cual debemos concluir que el daño padecido debe ser atribuible de manera exclusiva al actuar de la propia víctima.

Respecto de la línea de paramento para el bien inmueble en el que se presentó el insuceso qué motiva la presente acción, es importante precisar que en la demanda se ilustra que el mismo se encontraba en un tercer piso edificaciones que generalmente cuentan con un “voladizo” hacia el espacio aéreo público, estas obras que buscan ampliar el área de uso privado en los pisos superiores respecto del área privada real del primer piso, pero que van aumentando de forma imprudente la proximidad de la edificación del segundo piso y del tercer piso (lugar en el que se produce el accidente) hacia el cableado de transmisión de energía eléctrica de EMCALI E.I.C.E., E.S.P., este reduciendo la distancia que originalmente poseen la línea de transmisión eléctrica .

Si tenemos en cuenta lo normado en el artículo trece del RETIE en el Artículo 13 sobre lo que la parte accionante es reiterativa...

“En ningún caso se permitirá el paso de conductores de redes o líneas del servicio público, por encima de edificaciones donde se tenga presencia de personas.”

Pero que estratégicamente la parte actora guarda silencio sobre la nota del mismo artículo 13.1 que de manera textual impone restricciones a los particulares al prohibir...

“Nota: En redes públicas o de uso general no se permite la construcción de edificaciones debajo de los conductores; en caso de presentarse tal situación el OR solicitará a las autoridades competentes tomar las medidas pertinentes.

Tampoco será permitida la construcción de redes para uso público por encima de las edificaciones.”

Conforme a lo anterior es necesario tener como criterio de valoración que lo primero en el tiempo es primero en el derecho, en este orden de ideas es necesario manifestar que al tratarse de una Urbanización, las redes eléctricas se construyen de manera anterior a la ocupación de las viviendas, pues la red de distribución eléctrica es una fase inicial en la fase de urbanización, anterior a las construcciones de los inmuebles, planeadas y diseñadas con anticipación al proceso de comercialización de la Urbanización y esto opera también para servicios como los de acueducto alcantarillado y telefonía fija, de tal suerte que las redes existieron antes que las remodelaciones realizadas a la vivienda misma, remodelaciones que al obedecer a actuaciones de los particulares aumentaron el riesgo al construir de manera imprudente bajo las redes, todas las acciones mencionadas fueron realizadas por un tercero, diferente de del administrador y propietario de las redes eléctricas, y por tanto es este tercero el que debe asumir las consecuencias del riesgo generado, respecto de la reducción de la proximidad del inmueble a las redes y peor aún de la construcción bajo las redes superando la línea de paramento.

Por lo tanto la ampliación del inmueble disminuyendo la proximidad a las líneas de transmisión como hecho de un tercero es un hecho que incrementa el riesgo, de esta forma tenemos que el daño es resultado de una sumatoria de acciones, cómo es el que la edificación se construye con aproximación indebida, posterior a la existencia misma de las redes, y bajo las redes eléctricas, lo que indica que no solo es inexistente una acción u omisión por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali, que ponga en riesgo la vida de los usuarios sino que deja en claro las acciones provenientes por parte de los particulares al remodelar la vivienda aumentar su altura y a la vez la proximidad del cableado al superar la línea de paramento, constituyen en conjunto un aumento del riesgo del que el Distrito Especial de Santiago de Cali, no es partícipe, sino un actor pasivo y las acciones que aumentan el riesgo, independientemente de si las acciones de la edificación hayan sido o no ejecutadas por la víctima éstas le significaban al particular una mayor atención pues pese a que la instalación de las redes era preexistente a la edificación de las reformas de la vivienda estos de manera imprudente y prohibida, redujeron las distancias a niveles de mayor riesgo.

Todas las anteriores son acciones o de la víctima o de terceros, ninguna atribuible al Distrito Especial de Santiago de Cali, adicionalmente y conforme a la propia narrativa de los hechos, se vislumbra una acción última que sumada a las anteriores genera el lamentable desenlace, pues vemos cómo y lo decimos con el mayor de los respetos, de manera imprudente y descuidada la víctima manipuló un objeto de aluminio (material conductor de energía eléctrica) cuando realizaba una obra de construcción sobre el inmueble en un tercer piso, el cual se encontraba sin elementos de protección personal como un arnés, conectores, línea de posicionamiento y demás elementos que garanticen la seguridad, recibiendo como el señala una descarga eléctrica, atribuible a la propia víctima, en tanto desconoció su deber de autoprotección y la concreción del riesgo es producto de su actuar., adicional a ello manifiesta que a causa de la descarga eléctrica cae de un tercer piso, caída que probablemente le genera las fracturas, hecho

completamente atribuible a su responsabilidad por no tener los elementos de protección personal.

Por lo tanto, la causa exclusiva de que hubiere ocurrido el desafortunado accidente que motiva la presente demanda de responsabilidad estatal, es la propia conducta culposa de las víctimas al manipular un material conductor de energía eléctrica, cerca de la red de energía, lo cual prueba que fue él que a sabiendas del peligro que podía correr procedió a aproximarse con un objeto metálico a la red eléctrica, todo lo cual, se habría podido evitar si el señor JOSE ARBEY ARANGO, no hubiese realizado ese actuar imprudente.

En otras palabras, si la víctima no se hubiese acercado con un objeto metálico a la red eléctrica jamás habría desplegado la conducta imprudente que le permitió romper el aislamiento natural entre su cuerpo y el tendido eléctrico y que lo hizo objeto de una descarga eléctrica.

El señor JOSE ARBEY ARANGO no recibió una descarga eléctrica sin razón, sino que fue debido a la manipulación que hiciese de un material conductor de energía, como también a la posible violación de las distancias de seguridad por parte de la construcción ilegal que realizaron los propietarios del inmueble donde ocurrió el accidente, adicionándose a esta situación el hecho de no tener los objetos de protección personal, como el arnés, que hubiese evitado la caída desde el 3 piso, situación que origino las múltiples fracturas.

Es de recalcar con relación a lo anteriormente esbozado, la postura clara del derecho administrativo en torno a este tipo de asuntos y es que ellos se someten a principios claros trazados por parte del Consejo de Estado que establecen contundentemente que nunca el hecho de que exista un **RIESGO EXCEPCIONAL o CREADO** si se quiere, va a generar per se una indemnización automática, pues: “... **la temeridad de la víctima haría fracasar las pretensiones indemnizatorias de los damnificados**”

Y reitera:

“[...] No obstante lo dicho anteriormente –estima la Sala que la sola generación del riesgo en forma aislada necesariamente no puede llevar a la declaratoria de responsabilidad, pues si la entidad demuestra que el daño se presentó por culpa única y exclusiva de la víctima o por cualquier otra causa extraña como la fuerza mayor o el hecho exclusivo de un tercero no procede la imputación de responsabilidad contra la entidad demandada.[...]”.

➤ INDEBIDA DETERMINACIÓN DE LAS PRETENSIONES Y DE LA CUANTÍA

Dentro de los requisitos formales para la presentación de la demanda es determinar con claridad y precisión lo que se pretenda, en el presente caso se trata de lesiones, donde para poder cuantificar su afectación es necesario contar con el dictamen de la Junta Regional de Invalidez, por tanto para aplicar los parámetros y valores contemplados en la sentencia de unificación, es indispensable verificar la gravedad de la lesión sufrida por la víctima, el señor JOSER ARBEY ARANGO MARTINEZ y así tasar un valor en salarios mínimos, situación que no puede realizarse por cuanto no se aportó con la presentación de la demanda una valoración de la entidad correspondiente que determine el grado de afectación.

Profundizando el tema, no existe una justificación que permita establecer como se pretende una indemnización por este concepto al no disponer un dictamen pericial emitido por el máximo órgano, que es en este caso Dictamen de la Junta Regional de Calificación

de Invalidez, esta observación también puede tenerse en cuenta en lo pretendido por los demandantes para el Daño a la Salud, tal como se manifestó no hay prueba pericial que indique el valor a pretender.

Es preciso señalar que Las actuaciones de los integrantes de las Juntas de Calificación de Invalidez están regidas por los principios establecidos en la Constitución Política, entre ellos, la buena fe, el debido proceso, la igualdad, la moralidad, la eficiencia, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad, la integralidad y la unidad. Su actuación también estará regida por la ética profesional, las disposiciones del Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional o norma que lo modifique o adicione, por tanto sus calificaciones gozan de total validez probatoria dentro del proceso, existiendo carencia del mismo en el acervo probatorio.

➤ INEXISTENCIA DE FALLA EN EL SERVICIO

A título e excepción considero que en el presente asunto es no es aplicable la existencia de responsabilidad por falla en el servicio, sustentada en el hecho de que la parte demandante no demuestra una relación de causa-efecto, teniendo en cuenta que el daño ocasionado no fue producto de una acción de la Entidad Estatal, pues el accidente que ocasiona la descarga eléctrica, tiene sus causa en un comportamiento exógeno a la entidad demandada.

Por ello el presente caso deberá estudiarse bajo el régimen de falla probada, en el cual a la parte demandante le corresponde demostrar que convergen los elementos que materializan la responsabilidad a cargo de la Entidad demandada.

LA INNOMINADA

Solicito al señor Juez, acceder a las excepciones propuestas y en virtud de las mismas desvincular al Distrito Especial de Santiago de Cali, del proceso o en su defecto proferir sentencia absolutoria en favor del mismo

VI. PRUEBAS

Solicito muy respetuosamente al Honorable Operador Judicial, se sirva decretar las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES:

- Acuerdos emitidos por el H. Concejo Municipal referentes a las competencias de Emcali:
- ✚ Acuerdo 34 de enero 15 de 1999 “Por medio del cual se adopta el Estatuto Orgánico para la Empresa Industrial y Comercial de Cali, Emcali EICE E.S.P. se modifica el acuerdo 014 de 1996, se dan unas autorizaciones al señor Alcalde y se dictan otras disposiciones”

🚩 Acuerdo Municipal 0489 de 2020, que modifica el Artículo cuarto del Acuerdo 034 de 1999.

INTERROGATORIO DE PARTE:

Solicito a su señoría, la fijación de fecha y hora para el señor JOSE ARBEY ARANGO MARTINEZ de condiciones civiles conocidas en el proceso, absuelva el interrogatorio de parte que de manera verbal o en sobre cerrado les formule, en relación con los hechos materia de este proceso.

FACULTAD PARA CONTRAINTERROGAR:

Respetuosamente solicito me sea autorizado contrainterrogar a los testigos de la parte Demandante, en las audiencias respectivas para la recepción de testimonios que sean decretadas por su Despacho.

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

En escrito separado a esta contestación de demanda se está efectuando llamamiento en garantía de por ser la entidad compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA , Nit 860-524-654-6, N° 420-80-99400000018 que para la fecha tenía contrato vigente con el Municipio de Santiago de Cali hoy Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali .y a sus COASEGURADORAS.

RAZON SOCIAL	CALIDAD	%
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	Líder	32
Chubb Seguros de Colombia S.A.	Coaseguradora	28
SBS Seguros Colombia S.A.	Coaseguradora	20
HDI Seguros S.A.	Coaseguradora	10
Colpatria	Coaseguradora	10

Lo anterior con fundamento en lo normado en el Artículo 90 de la Constitución Nacional , artículos 140 y 225 de la Ley 1437 de 2011, CPACA, artículos 64, 65 y 66 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso.

PERSONERÍA

Solicito a la Honorable Juez, reconocerme personería para actuar dentro del proceso, conforme al poder que se me ha conferido y que adjunto a este escrito.

ANEXOS

Anexo al presente escrito los siguientes documentos:

1. Poder con sus respectivos anexos.
2. Copia de escrito de llamamiento en garantía con sus anexos
3. Copia autentica de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA con el fin de que se haga parte en el presente proceso. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.420-80-994000000109 con vigencia desde el 24 de Mayo de 2018, hasta el 29 de Mayo de 2019..
4. Certificado de Existencia y Representación Legal ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NOTIFICACIONES

Los demandantes y sus apoderados:

Recibirán notificaciones en la Calle 30 Norte N° 2 BN 66 del Barrio San Vicente, Corriente: notificación.procesal@gmail.com

Las entidades demandadas:

Distrito Especial de Santiago de Cali: en la secretaria de su oficina judicial o en el Centro Administrativo Municipal CAIV1, Torre Alcaldía piso 9 Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, notificaciones electrónicas al correo notificacionesjudiciales@cali.gov.co

Las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI-EICE-E.S.P E.S.P., recibirá notificaciones en la Avenida 2 Norte No 10-70 de la ciudad de Cali. Igualmente podrá recibir notificaciones al correo electrónico notificaciones@emcali.com.co

De las llamadas en Garantía:

Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa:
notificaciones@solidaria.com.co

Chubb Seguros Colombia: notificacioneslegales.co@chubb.com

SBS Seguros Colombia S.A.: notificaciones.sbsegueros@sbsegueros.co

AXA COLPATRIA : notificacionesjudiciales@axacolpatria.co

HDI Seguros S.A.: presidencia@hdi.com.co

De la señora Jueza, cordialmente,



VICTORIA MARTÍNEZ VARGAS

C. C. N.º 31,581,084 de Cali (Valle)

T. P. N.º 123,546 del C. S. de la J.

Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co